



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN 1061

"POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA DIRECTORA LEGAL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 1996, el Decreto 1594 de 1984, la Resolución 438 de 2001, el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, los Decretos Distritales 561 y 562 del 29 de diciembre de 2006 y la Resolución N° 110 del 31 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante Acta de Incautación, del **17 de Agosto de 2005**, obrante en folio 02 del Expediente **DM-08-2005-1904**, la Policía Ambiental y Ecológica, efectuó diligencia de decomiso preventivo de (985) especímenes montados en seco; *37 del género Soosiulus, 918 de la familia Cicadellidae y 30 de otros géneros*, en el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, al señor **JOSÉ ENRIQUE CASTILLO LEAL** quien se identificó con la C.C. No.79.115.710, y residente en la Carrera 13 No. 28 -01 Piso 7 de ésta ciudad.

Que mediante memorando interno SAS – RF 2104 del 26 de Octubre de 2005, la Subdirección Ambiental Sectorial, remite a la Subdirección jurídica, el documento anteriormente mencionado y el informe de incautación, e informa que en atención a la solicitud del *Instituto Alexander Von Humboldt* para la verificación de unos insectos que retornarían al país luego de un proceso de identificación taxonómica en el exterior, se encontró que ingresaron al país (985) especímenes sin el respectivo *NO CITES* expedido por el *Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial*.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ 1061

Que con el mismo informe comunica que los insectos importados procedían de la *Universidad de Kentucky en Estados Unidos* y fueron ingresados por el investigador del proyecto junto con dos grupos más de insectos, los cuales si contaban con el documento *NO CITES*.

Que el informe de incautación dice que con el radicado DAMA ER25838 del 25 de Julio de 2005 el *Instituto Alexander Von Humboldt* solicitó la verificación del permiso *NO CITES* de importación No. 347 del 06 de Julio de 2005 que amparaba el ingreso al país de 3.290 ejemplares de los órdenes *Hymenópteros, Coleópteros y Hemípteros*.

Que durante el proceso de verificación de los insectos en el cual estuvo presente el señor **JOSÉ ENRIQUE CASTILLO LEAL**, administrador de colecciones biológicas del *Instituto Alexander Von Humboldt* pudo observarse que tres grupos diferentes de los insectos que fueron ingresados al país.

Que el primer grupo pertenecía a los insectos amparados con el documento *NO CITES* No. 0347 del 06 de Julio de 2005, expedido por el *Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial*, del cual el DAMA tenía conocimiento del ingreso por la solicitud de verificación presentada por dicho Instituto. Dicho permiso relacionaba la importación de 3.290 especímenes, sin embargo tan sólo ingresaron al país 1.023 especímenes.

Que el segundo grupo de insectos se encontraba amparado con el permiso *NO CITES* No. 0407 del 05 de Agosto de 2005. La solicitud para la verificación de los especímenes amparados con éste permiso fue presentada al DAMA con el radicado ER28949 del 17 de Agosto de 2005. La cantidad total de especímenes relacionados en el *NO CITES* correspondía a 493 ejemplares de diferentes órdenes de la clase insecta; sin embargo tan sólo ingresaron al país 281 insectos.

Que el tercer grupo de insectos transportados por el investigador correspondía a uno paralelo del cual no se tenía programada la importación por parte del *Instituto Alexander Von Humboldt*, por tal motivo éstos fueron ingresados a Colombia sin el permiso *NO CITES* otorgado por el *Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial*.



2



Que en el momento de la diligencia el funcionario del *Instituto Alexander Von Humboldt* manifestó que los insectos fueron ingresados por un investigador que se encontraba adelantando un trabajo en la *Universidad de Kentucky en Estados Unidos*, y que sin el consentimiento del *Instituto Alexander Von Humboldt* ingresó el tercer lote.

Que mediante **Auto No. 3552 del 29 de Diciembre de 2005** el DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, inició proceso sancionatorio en contra del *Instituto Alexander Von Humboldt*, a través de su Representante Legal y en contra del señor **JUAN MANUEL VARGAS ROJAS** identificado con C.C No. 79.505.221 de Bogotá por los hechos relacionados anteriormente.

Que se surtió notificación personal a la doctora **IVONNE LILIANA RODRÍGUEZ HERRERA**, en calidad del Representante Legal del *Instituto Alexander Von Humboldt*, el día 14 de Febrero de 2006.

Que el señor **JOSÉ ENRIQUE CASTILLO LEAL** no presentó descargos, dentro de la oportunidad legal descrita en el artículo 207 del Decreto 1594 de 1984.

Que por medio de la **Resolución No. 3180 del 30 de Diciembre de 2005**, se entrega en calidad de depositario al *Instituto Alexander Von Humboldt (985)* especímenes montados en seco, *37 del género Soosiulus, 918 de la familia Cicadellidae y 30 de otros géneros*, a título gratuito que fueron decomisados mediante acta del 17 de Agosto de 2005 al señor **JOSÉ ENRIQUE CASTILLO LEAL**.

Que por medio de la **Resolución No. 1059 del 27 de Junio de 2006** se aclararon los artículos segundo y tercero de la Resolución 3180 de Diciembre de 2006.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial, las señaladas en el artículo 8º, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 Ibídem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente



Handwritten mark or signature.



sano y establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 Constitucional, le asigna al Estado el imperativo de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, generando desarrollo sostenible, conservación y restauración o sustitución de estos. Atribuye también como responsabilidad estatal la prevención y control de agentes de deterioro ambiental, y que en cuyo caso, se configura la potestad sancionatoria como un mecanismo de protección frente al quebrantamiento de normas ambientales, y que consecuentemente hace exigible el resarcimiento de los daños originados.

Que de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, nace para el Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y la diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, la carta política de Colombia, prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, "*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio*", y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.





Que en relación con la actuación ambiental de carácter sancionatorio surtida dentro del expediente **DM-08-05-1904**, en contra del señor **JOSÉ ENRIQUE CASTILLO LEAL** ésta Secretaría considera pertinente señalar lo dispuesto en el Parágrafo 3º del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, en el que se estipula que: *"Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya."*

Que la Resolución 1367 de 2000, en su artículo 3 prescribe: *"El interesado en importar o exportar especímenes de la diversidad biológica pertenecientes a especies no incluidas en los apéndices de la convención CITES, deberá solicitar ante el Ministerio del Medio Ambiente autorización de importación o exportación con fines comerciales o de investigación, según el caso, diligenciando el correspondiente formato de solicitud"*.

Que el Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que: (...) *"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."*

Que sobre esta materia, vale la pena recalcar la posición del H, Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 4438, MP. Doctor Libardo Rodríguez, frente a la caducidad relacionada con el hecho puntual en el tiempo y el transcurso del mismo por más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

(...) "Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la Ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable, debe interpretarse que teniendo en cuenta las normas que dicta el Legislador debe producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando se hace referencia a la caducidad de la acción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en el medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición dentro del término de tres años previstos de manera general en la norma. (...)"





Que al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

*"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas que para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, **por lo tanto el término se debe contar a partir del momento que se produce el hecho infractor**". (Resaltado fuera del texto original).*

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de Noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

"...Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: " (...)

**Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa" (...)* (subrayado fuera de texto)

Que así las cosas y, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y, las instrucciones impartidas a través de la





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1061

Directiva No. 007 del 2007 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de un término de 3 años contados a partir de la fecha en que se produjo el decomiso preventivo, el día **14 de Diciembre de 2004** para la expedición del acto administrativo de sanción, notificación y debida ejecutoria; trámite que no se surtió, operando de ésta manera el fenómeno de la caducidad.

Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos Constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, éste culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

Que en igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra "*Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos*" Primera Edición 2004, expresó al respecto de la caducidad lo siguiente:

(...) "Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa exceptiva. El funcionario competente en el juzgamiento pertinente, no solo debe sino que está obligado a declararla sin necesidad de petición de parte. (...)"

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, e implementar las acciones de policía que sean pertinentes para el efecto.

Que de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 1º de la Resolución No. 0110 del 31 de enero de 2007, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, mediante la cual se efectúan unas delegaciones a la Dirección Legal Ambiental, le corresponde suscribir los actos administrativos necesarios



GOBIERNO DE LA CIUDAD



dentro de los procesos que se adelanten como consecuencia de la violación de las normas sobre protección ambiental o sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria en el proceso sancionatorio iniciado por el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente -DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, en contra en contra del *Instituto Alexander Von Humboldt*, a través de su Representante Legal y en contra del señor **JUAN MANUEL VARGAS ROJAS** identificado con C.C No. 79.505.221 de Bogotá de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

SEGUNDO: Archivar las presentes diligencias, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Resolución al Representante Legal del *Instituto Alexander Von Humboldt* en la Calle 28 A No. 15-09 de ésta ciudad y al señor **JUAN MANUEL VARGAS ROJAS** identificado en la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agrarias.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Asuntos Disciplinarios de la Entidad, para los fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Control de Flora y Fauna de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.



GOBIERNO DE LA CIUDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

1061

ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente Resolución a la oficina de Asuntos Disciplinarios de esta Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar la presente providencia en el boletín de la entidad y fijarla en lugar público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 20 FEB 2009

ALEXANDRA LOZANO VERGARA
Directora Legal Ambiental

PROYECTÓ. Martha Liliana Martínez Amaya
REVISÓ. DR. OSCAR TOLOSA
EXPEDIENTE. DM-08-05-1904.



GOBIERNO DE LA CIUDAD